

■ Article]

ENTREMONS. UPF JOURNAL OF WORLD HISTORY

Universitat Pompeu Fabra | Barcelona

Número 2 (novembre 2011)

www.upf.edu/entremons

El Hambre en Colombia, hambre y conflicto (1984-2009)

Camilo TRIANA CÁCERES

camilotria@yahoo.com

resumen

Este artículo analiza la historia y los problemas de la producción de alimentos en Colombia en el período entre 1984 y 2009. El enfoque principal del estudio se dirige hacia el análisis de las directivas agrícolas de los diferentes gobiernos y sus objetivos de desarrollo que se enmarcan en políticas macroeconómicas de los últimos veinticinco años. En este período, el estable crecimiento económico que vivió Colombia, se vio contrariado por la incapacidad de rebajar el número de las personas que pasan hambre. Es un problema que responde a muchas causas, entre ellas el incesante conflicto armado, el reparto desigual de la tierra, el narcotráfico y algunas políticas controvertidas del gobierno. Entre otras cosas, el presente artículo también plantea la pregunta de cómo Colombia puede asegurar su soberanía alimentaria.

palabras clave

Colombia, hambre, soberanía alimentaria, conflicto

Colombia en 1970 ocupaba un deshonroso lugar en el mapa alimentario de la FAO:¹ entre el 15 y el 30 por ciento de sus habitantes sufría de desnutrición; era el peor balance para Suramérica, un promedio más alto incluso que el de los países más pobres de la subregión como Bolivia y Paraguay, y tan sólo mejor que algunos de Centroamérica, Haití uno de ellos, nación reconocida desde hace varias décadas como la más pobre de la región latinoamericana. Para 2009, después de unos treinta años de lucha hasta cierto punto eficaz contra el hambre, la nación parece haber retrocedido. Ya en 2005 se constataba una tendencia al decrecimiento que se refleja en la actualidad. Colombia, según la FAO, en 2005 presentaba nuevamente cifras alarmantes: de cada 100 colombianos entre 10 y 15 tenían graves problemas alimenticios.

¹ FAO Hunger Map. En www.fao.org

Ante esta realidad es inevitable plantearse un interrogante: si el problema no es la calidad del suelo, si el país ha entrado en una etapa de desarrollo industrial desde los años treinta del siglo pasado y si desde esta época más o menos las cosechas gradualmente han superado las contingencias naturales, ¿por qué el hambre persiste y parece cobrar fuerza en el país?

El análisis de posibles factores que inciden en el problema del hambre en Colombia debe buscarse entonces en las políticas implementadas por los distintos gobiernos colombianos, y para el caso de este estudio los mandatos de los últimos veinticinco años. Nos proponemos, por tanto, estudiar el período comprendido entre 1984 y 2009. El propósito es revisar las directivas agrícolas de los diferentes gobiernos y sus objetivos de desarrollo que se enmarcan en políticas macroeconómicas.

Al hablar de éstas, un aspecto clave en la vida colombiana es el grave problema del conflicto armado, la guerra civil entre gobierno y fuerzas insurgentes. Como veremos, Colombia no ha podido trascender o superar su situación de guerra interna. Por el contrario, ésta se ha redoblado en la última década y paralelamente se han perdido, al menos parcialmente, los avances que se habían efectuado en la lucha contra el hambre. Es decir, se ha producido un retroceso respecto de los logros alcanzados a finales del anterior siglo según registran organismos como la FAO, la OCDE y distintas ONG internacionales. Hablar del hambre en Colombia, sin tener en cuenta el conflicto armado actual que padece el país desde la década de 1960 y que tiene profundas raíces en el tema de la tierra, su concentración en pocas manos y las fallidas reformas agrarias, es arar en terreno árido.

Bajo este punto de vista, parece evidente que en Colombia confluyen un sinnúmero de variables que hacen tambalear la lucha contra el hambre. La principal es sin duda el impacto negativo que han tenido sobre el campo y los campesinos las guerrillas, los paramilitares e incluso las mismas fuerzas armadas constitucionales. Estos grupos han influido negativamente en la situación de hambre que ha conocido la nación colombiana, ya que son generadores de violencia, desplazamiento de poblaciones y han venido reemplazando cultivos tradicionales por hoja de coca y amapola para la producción de droga (caso de las guerrillas y grupos paramilitares) o monocultivos para combustibles (política gubernamental de los últimos años).

El período a analizar

El período histórico comprendido entre 1984 y 2009 es significativo para Colombia. Se trata de veinticinco años de crecimiento económico bajo diversas orientaciones macroeconómicas, ideológicas y sociales, nacionales e internacionales, que han influido en el conflicto armado y en la lucha contra el hambre en el país. Los gobiernos que han dirigido Colombia estos años son los siguientes:

1/ Gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)

Su política de paz tenía presente lo que el analista norteamericano Marc Chernick, experto en el conflicto colombiano, ha denominado «*Condiciones objetivas y subjetivas de la*

violencia». ² En su momento esta política fue esperanzadora, aunque el proceso de paz no se desarrolló hasta su conclusión. La política económica de Betancur, que buscaba incentivar la industria nacional, se caracterizó por ser de corte proteccionista.

2/ Gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).

El lema de su estrategia de paz «*mano tendida, pulso firme*» produjo un par de interesantes resultados, a saber la desmovilización de los grupos guerrilleros M-19, EPL y el movimiento indígena Quintín Lame. A nivel macroeconómico, Barco quiso impulsar la inversión estatal en regiones y sectores sociales hasta entonces escasamente atendidos, su gobierno continuó e impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza. El estilo de política macroeconómica pasó de proteccionista a liberal e incluso neoliberal de acuerdo a distintos analistas económicos.

3/ Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994)

Marc Chernick considera la política de paz de Gaviria como continuista de la de Barco, pero en ella se amplía la agenda del diálogo, por tanto se abren más temas de discusión entre gobierno y guerrilla. Los resultados fueron alentadores. En materia macroeconómica, Gaviria se distanció del proteccionismo e impulsó la apertura económica, política de resultados discutibles para la industria y especialmente para el campo y agricultura. La reforma agraria de 1994 fracasó de acuerdo con la opinión de Chernick y otros analistas.

4/ Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)

Durante el período de Samper las esperanzas de conseguir la paz se vieron frustradas por la crisis institucional causada por las acusaciones y pruebas que mostraban que el cártel de Cali había financiado con dinero fruto del tráfico de drogas la campaña del presidente. En estas circunstancias las guerrillas se negaron a dialogar con el gobierno considerado ilegítimo en distintos sectores de la sociedad debido a la difusión de conversaciones entre miembros de la campaña y narcotraficantes que fueron divulgadas por los medios de comunicación.

En el terreno económico el panorama no fue muy distinto, pues los EE.UU. llevaron difíciles relaciones con el gobierno colombiano por las finanzas *non sanctas* de la campaña. Siendo EE.UU. el principal socio comercial de Colombia, la economía colombiana empezó poco a poco a entrar en recesión.

5/ Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002)

Durante el gobierno Pastrana se lanza tal vez la más ambiciosa estrategia de paz que el país haya conocido. Sin embargo, no se llega a buen puerto y, de hecho, la guerra se recrudece. Aparece entonces el Plan Colombia de ayuda militar de EE.UU. a Colombia que es un elemento clave para explicar la actual situación de hambre en el país. La política macroeconómica de Pastrana se orienta de manera similar a la de Gaviria: se procura atraer la inversión extranjera y el mercado se abre a un sinfín de productos importados. A pesar

² Chernick MARC, *Acuerdo Posible, Solución Negociada al conflicto armado colombiano* (Bogotá: Ediciones Aurora, 2008), 83.

de las intenciones gubernamentales de recuperar el campo, los problemas de éste se agudizan. De ellos, el desplazamiento forzado de poblaciones es uno de los más evidentes. El informe de la FAO del año 2003 confirma que la lucha contra el hambre empieza a conocer retrocesos.

6/ Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)

La elección de Uribe Vélez se dio por el hastío de la opinión pública colombiana frente a los procesos de paz fallidos y la posición ambigua de los grupos guerrilleros frente a una sociedad que decían defender pero a la que atacaban mediante secuestros, extorsiones, amenazas, masacres a campesinos y desplazamiento forzado entre otras modalidades de violencia. Uribe impulsó una política de paz para los grupos paramilitares nacidos ilegalmente para combatir las guerrillas. Pero de otro lado, siempre dio un trato de terroristas exclusivamente a las guerrillas que aún persisten en el conflicto, las FARC y ELN. El gobierno Uribe sintió que podía estar en posición de fuerza y derrotar militarmente a las guerrillas, debido a sucesos militares importantes como los constatados contra las FARC en 2008.

En materia económica Uribe siguió los lineamientos de Pastrana entre los cuales se destacan los Tratados de Libre Comercio, TLC, especialmente el acuerdo con EE.UU. que ya ha sido negociado, pero que aún carece de la aprobación de los parlamentos en ambos países. En el tema del campo, la política del gobierno Uribe puede resumirse como interesada por un lado en la erradicación de la hoja de coca y la amapola, plantas de las que se derivan la cocaína y la heroína, y, por otro, en el uso y adecuación de tierras para biocombustibles. Miles de campesinos, antiguos propietarios de minifundios, son ahora empleados asalariados de empresas productoras de biocombustibles.

Un país que perdió su soberanía alimentaria

Colombia perdió su soberanía alimentaria durante los últimos veinticinco años, especialmente a partir de la década de 1990 con el recrudecimiento de la guerra y el auge del narcotráfico, unidos a la aparición del paramilitarismo. Lo muestra el desnivel en la comparación de la situación alimentaria entre 1990 y 2003. En estos años Colombia ha pasado de ser un país exportador a un país importador de alimentos. Al mismo tiempo, son en extremo preocupantes las cifras que muestran un crecimiento de la pobreza a partir de 1999, una fuerte tendencia a la carencia de alimentos que crece de forma sistemática desde 1996 y una disminución de la producción de alimentos comparada con el crecimiento de la población. Durante los años 70 y 80 la población crecía, pero la producción también aumentaba. Hoy la población no crece a tal ritmo, sin embargo, se produce menos y no existe superávit en alimentos.³

El hambre en Colombia en cifras

En 1970 Colombia presentaba el peor balance para Suramérica y conocía un conflicto armado de baja intensidad, pero no era como es hoy el único país latinoamericano en

³ Colombia-seguridad alimentaria, DOCUMENTO PDF DE LA FAO 03/03/2006. www.fao.org

situación de guerra interna. De hecho, la proliferación de guerrillas opuestas a los gobiernos, bien elegidos democráticamente o dictatoriales, era común en Latinoamérica.

El país o, más concretamente, sus gobiernos proyectan e intentan desarrollar políticas de paz desde el año 1984 hasta 2002. Paralelamente, en la década de los 80, son palpables algunos avances en la lucha contra el hambre. En los últimos veinticinco años de procesos de paz y su relación con el hambre, en Colombia se trazan objetivos de lucha contra la pobreza, de fomento al desarrollo y por ello se da por sentado que los progresos en estos temas deberían causar la disminución o erradicación del hambre.

Revisando cifras del DANE (Departamento Nacional de Estadística) sobre la incidencia de las muertes por hambre en Colombia en 1980 y 1985 encontramos los siguientes datos: en 1980 murieron por causas asociadas a la carencia de alimentos 3.131⁴ colombianos, mientras que en 1985, 2.195,⁵ lo que parece revelar una mejoría de la situación que podría explicarse de la siguiente manera.

Recordemos que en 1984, bajo el gobierno de Betancur, se iniciaron procesos de paz con las guerrillas y que la incidencia del conflicto disminuyó momentáneamente por las treguas que se pactaron. De otra parte, para los años ochenta y de acuerdo con las políticas agrarias implementadas por los distintos gobiernos, Colombia registraba aún una balanza comercial favorable en cuanto a su producción de alimentos: se exportaba más de lo que se importaba, no se establecía aún la sustitución de productos nacionales por extranjeros. Los intentos de paz, las treguas entre fuerzas armadas y guerrillas y la soberanía alimentaria en un país básicamente agrícola bien pudieron influir en una mejora del acceso a los alimentos de los colombianos más vulnerables.

Las cifras de decesos por problemas asociados a la alimentación en 1990 registran una relativa mejora, 1.496 fallecimientos.⁶ En diez años, de acuerdo a las estadísticas del DANE, la incidencia de los problemas por baja nutrición descendió. Como hemos visto, los fallecimientos por esta causa se redujeron en casi un 50 %: 3.131 a finales de los años setenta contra 1.496 a inicios de los noventa. Recordemos una vez más que es una época de relativa paz. Así lo indica el hecho de que se llevaran entonces a feliz término las negociaciones de paz con el M-19. Aquél no fue un período de fuerte desplazamiento forzado de campesinos. La soberanía alimentaria se mantuvo.

El análisis de la incidencia del hambre en el país es más factible y seguro a partir de la década de los noventa. Afirma la FAO que entre 1979 y 1981 la ingesta promedio de nutrientes de cada colombiano era de 2.290 kilocalorías/día⁷, cantidad que aumentó a 2.410 entre 1989 y 1991, cifra que, no obstante, no es muy elevada y, tratándose de una

⁴ Copia de defunciones 1980. Documento en PDF. Disponible en: www.dane.gov.co

⁵ Copia de defunciones 1985. Documento en PDF. Disponible en: www.dane.gov.co

⁶ Copia de defunciones 1990. Documento en PDF. Disponible en: www.dane.gov.co

⁷ FAO Statistical Year Book 2003. Documento en PDF, disponible en: www.fao.org

media, oculta las desigualdades. Es más importante fijarse en el índice de población hambrienta, que en Colombia entre 1979 y 1981 alcanzaba un 17,2 %, superior a la media en Suramérica que era del 14 %⁸. Ello significa que 6,1 millones de colombianos, sobre una población total de 35 millones, padecían hambre. A nivel del conflicto armado, el cual guarda relación con la problemática del hambre, la situación a inicios de 1990, recordémoslo, es de ralentización por la paz firmada con el M-19, EPL, ADO y Quintín Lame. Sin embargo, en 1991 la guerra se incrementaría contra las FARC y el ELN. La presencia y auge de los paramilitares sería cada vez más evidente. Fruto de la apertura económica del gobierno Gaviria, la producción agrícola y ganadera colombiana comenzará a sufrir la competencia en su mercado propio y tradicional por la llegada de importaciones inusuales como arroz y pollo. A futuro la balanza comercial agrícola colombiana cambiará y el país perderá la soberanía alimentaria.

Para el período 1995-1997 analizado por la FAO se considera que en Colombia el hambre afectaba al 13,1 % de la población, porcentaje que seguía siendo mayor que el suramericano, el cual arrojaba un 10 %.⁹ En 1995 ya se habían producido hechos notables en cuanto a los procesos de paz en el continente. Al respecto cabe destacar el proceso de paz de El Salvador que ha sido puesto como modelo para Colombia en distintas ocasiones. En 1992 se firmó la conclusión de dicho proceso y poco a poco Colombia fue quedando como el único país que enfrentaba una guerra interna. Para el mismo lustro, 1995, el impacto de las políticas agrícolas de apertura económica del gobierno Gaviria era palpable. Posteriormente la quiebra institucional o, en cierto sentido, el vacío de poder a que se ve sometido el país durante el mandato de Ernesto Samper no cambia el rumbo de estas equivocadas políticas y la pérdida de soberanía alimentaria continúa. Es notable el incremento de los cultivos de coca y amapola que en muchos lugares reemplazan a los cultivos alimenticios tradicionales. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la FAO y el DANE, en 1995 la cifra de colombianos fallecidos por causas asociadas a la falta de alimentos descendía a 1207,¹⁰ lo cual quiere decir que en la lucha contra el hambre (siempre asociada a las políticas agrícolas y de erradicación de la pobreza) el país experimentaba entonces a principios de los noventa algún avance.

Finalmente, de acuerdo a las cifras oficiales de la FAO y el DANE, el período de 1999-2005 presenta algunos retrocesos en la lucha contra el hambre. El DANE asevera que la cifra de decesos por hambre en 1999 fue de 1931.¹¹ Es el último dato oficial sobre defunciones que registra su página web y es un dato preocupante pues es una cifra más alta que la de 1990 y 1995. Estamos ante un retroceso ligado muy seguramente al aumento del conflicto a mediados de los noventa, el incremento de fuerza pública y el gasto militar, el auge del paramilitarismo y su contrarreforma agraria. Marc Chernick, citando un estudio del PNUD, afirma que desde mediados de los años ochenta y la mitad de los noventa los

⁸ FAO statistical year book 2003. Documento en PDF, disponible en : www.fao.org

⁹ FAO statistical year book 2003. Disponible en: www.fao.org

¹⁰ Copia de defunciones 1995. Disponible en : www.dane.gov.co

¹¹ Copia de defunciones 1999. Documento en PDF. Disponible en: www.dane.gov.co

paramilitares y narcotraficantes se apoderaron de entre cinco y seis millones de hectáreas de tierra de cultivo.¹² Se debe añadir a esta realidad las hectáreas de cultivos de coca en poder de la guerrilla situadas especialmente al sur del país. En cuanto al hambre que sufría la población colombiana las cifras de la FAO eran contundentes: el 13,4 % de los colombianos la padecía, y este porcentaje, válido para los años 2003-2005, era ligeramente superior al 13,1 %¹³ del período 1995-1997, un hecho que se suma a los decesos por hambre de 1999 que como vimos aumentaron en forma considerable frente a períodos anteriores. Una vez más Colombia presentaba unas cifras de hambre más altas que el conjunto de Suramérica pues el porcentaje de personas con problemas alimentarios en el subcontinente era de 9 %, mejorando en un punto frente a la medición anterior. La conclusión del estudio de la FAO para 2003 y las actualizaciones hechas en 2006 y 2008 a aquel estudio no podían ser otras que Colombia cedía en su particular lucha contra el hambre. Aún si la ingesta de kilocalorías/día por persona era alentadora y arrojaba 2.670 frente a 2.290 en 1979-1981, año del primer dato oficial.

Está claro que estas cifras coinciden con el clímax de violencia generado por el conflicto armado entre las FARC, el ejército, el ELN y los grupos paramilitares. Desde mediados de los años noventa la guerra interna se incrementó. En 2001 hizo su aparición el Plan Colombia y en medio de este período creció dramáticamente el desplazamiento forzoso de población básicamente campesina, que ronda la cifra de 3.561.757 de colombianos, un hecho íntimamente ligado al aumento del hambre en el país. Es tal la incidencia del desplazamiento forzado que la cifra de personas afectadas en Colombia supera a la de Afganistán donde desde 2001 intervienen de manera directa por la vía militar los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. En 2006 había en Afganistán 2.750.540 personas que abandonaron sus hogares por culpa de la guerra.

Sin mayores cifras oficiales pero concientes de que en Colombia la guerra interna se mantiene, el panorama en la lucha contra el hambre no es alentador. Colombia incrementó su presupuesto militar en casi 2 puntos de su PIB entre 1990 y 2005. En 1990 este presupuesto representaba el 1,8 del PIB, mientras que en 2005 se situaba en el 3,7, el segundo más alto de la región después de Chile (4,8) que para el mismo período lo había reducido en medio punto. Colombia era, de largo, el país latinoamericano que contaba con más fuerza armada y parece evidente que esto continua así hoy. Por sorprendente que pueda parecer, Colombia destina un porcentaje más elevado de su PIB al gasto militar que un país como China (2 puntos de su PIB en 2005).¹⁴ Esto sucedía al mismo tiempo que la inversión destinada al campo bajaba: a principios de los años noventa se acercaba al 5 % del presupuesto nacional, mientras que a comienzos del presente siglo merodeaba el 1 %.¹⁵ Las políticas diseñadas para el campo, en opinión de quien escribe, se han quedado en letra muerta. La Reforma Agraria de 1994 no se puso realmente en marcha, no se han

¹² Chernick, Marc. *Op cit.*, 78.

¹³ FAO statistical year book 2003. Documento en PDF. Disponible en: www.fao.org

¹⁴ Anuario internacional. *Op. cit.*, 215.

¹⁵ Políticas Agrarias para Colombia. Publicaciones ILSA. Bogotá, agosto de 2004, 72.

adoptado las políticas adecuadas para defender o recuperar la soberanía alimentaria y se han priorizado los cultivos destinados a la producción de biocombustibles y a la exportación por encima de los cultivos de autoconsumo y mercado interno. En estas circunstancias, ser optimistas sobre avances en la lucha contra el hambre en los últimos años no es muy racional.

Los movimientos campesinos, indígenas y afrocolombianos, no sólo se han distinguido por sus marchas en las que expresan su inconformismo y con las que buscan visibilizar su situación, también gracias a su organización han empezado a producir documentos importantes. En 2003, estas comunidades apoyadas por distintas ONG publicaron el documento *Políticas Agrarias para Colombia*, que establece varios puntos de vista sobre su situación como víctimas del conflicto. En el punto anterior coinciden con diversos analistas de la violencia en Colombia entre los que cabe citar a María Luisa Rodríguez Peñaranda y su estudio *Guerra incestuosa. Colombia y su cola de cerdo*,¹⁶ que ingeniosamente alude a la obra del Nóbel García Márquez para significar, como al final de aquella novela, que las generaciones en Colombia y especialmente los más pobres, enfrentados a la violencia del conflicto y el hambre, no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra.

En el marco de la campaña «Por el derecho a la tierra» se firmó en abril de 2003 el Mandato Agrario, que es una denuncia sobre la difícil situación de los pueblos indígenas y afro, así como de la comunidad campesina, y en segunda instancia su propuesta sobre el agro y campo colombiano.

Es interesante ver cómo las propuestas del Mandato Agrario coinciden en diversos puntos con las conclusiones de analistas como Peter Rosset y la ONG Agora Nord-Sud. El análisis que hacen las comunidades que impulsan el Mandato es el siguiente:

Enfrentamos el proceso de la llamada globalización impuesto por Estados Unidos y otros países poderosos, mediante organismos multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, en beneficio de las empresas transnacionales, las cuales avanzan en el control mundial de la producción y la distribución de alimentos y de los territorios, mediante la apropiación monopolista y la manipulación de la tecnología, del saber y del patrimonio genético, y mediante medidas de reforma política y represión que imponen y garantizan tanto ese control como el dominio territorial.¹⁷

A continuación, denuncian cómo alrededor de los proyectos de expansión de ciertos cultivos apadrinados por grandes empresas las condiciones de vida, culturales, sociales y de medio ambiente quedan subordinadas a los intereses de los inversores. En Colombia los proyectos más grandes son los biocombustibles que ya han colonizado grandes superficies de tierra antaño destinadas a cultivos que alimentaban a los campesinos y

¹⁶ RODRÍGUEZ PEÑARANDA, María Luisa, «Guerra incestuosa en Colombia y su «cola de cerdo», *Las Raíces Históricas de los conflictos armados actuales* (Valencia: Universidad de Valencia, 2010), 121-140.

nutrían el mercado nacional. No pocas comunidades campesinas trabajan para dichas empresas a cambio de salarios muy bajos, en detrimento de su patrimonio cultural y sin posibilidad ejercer una autonomía alimentaria.

Por ello, el Mandato reivindicó los siguientes derechos: la soberanía alimentaria como un derecho fundamental de los pueblos, la autonomía de cada pueblo para determinar lo que siembra y consume, la garantía de toda la población a alimentos sanos y nutritivos, el no rotundo a la producción y consumo de alimentos genéticamente modificados, la defensa a la producción nacional de alimentos y el reconocimiento de que existe una economía campesina, indígena y afrodescendiente.¹⁷ Finalmente, el Mandato Agrario instaba al Estado a establecer las garantías para su cumplimiento y a reconocer la existencia de dichas comunidades, especialmente la campesina. El matiz es importante porque existe de acuerdo a la Constitución de 1991 un reconocimiento de las comunidades afro e indígena, pero no explícitamente de la campesina.

Es de igual relevancia señalar que el Mandato Agrario establece que los tratados de libre comercio entre Colombia y países altamente desarrollados son peligrosos para las comunidades más vulnerables, pues entrañan riesgo para distintos productos del agro colombiano y para las comunidades, que tienen sus propias formas de administración de los territorios y de preservación de su cultura. Son patrimonio de estas comunidades, por ejemplo, los usos medicinales de las plantas.

En sus reivindicaciones, las comunidades insisten en su derecho a la tierra y reclaman una verdadera reforma agraria en la que ellos tengan voz y voto. También son conscientes de sus carencias y limitaciones en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías para el campo, por tanto quieren incorporarse al uso de éstas, a la vez que al acceso de la tierra. Reconocen que los créditos y préstamos son importantes, pero arguyen que se deben dar créditos en condiciones aceptables para los campesinos y no aquellos que redundan en un simple lucro para los bancos. Por desgracia la realidad es otra, gobierno a gobierno la política agrícola hace énfasis en otorgar créditos y las adjudicaciones quedan a mitad camino, pues los intereses hacen que muchos «beneficiarios» o tomadores de créditos terminen en las listas de morosos. Resultado: los campesinos cada vez solicitan menos créditos, y, entre aquellos que los solicitan, la dificultad por amortizarlos, es decir, la morosidad, es común, por ello muchas veces en Colombia pedir un crédito es un camino seguro hacia la pérdida de la propiedad.

Lo más relevante del Mandato es tal vez el hecho de que el campesinado colombiano se ha dado cuenta de su rol en la sociedad y por ello está entendiendo que puede negociar como actor político. No como un actor político que busca el poder, sino como un actor político que busca ser reconocido y respetado.

Conclusiones

¹⁷ Políticas Agrarias para Colombia. *Op. cit.*, 16.

El hambre en Colombia es ciertamente un problema ligado al conflicto armado, y un problema derivado de la pobreza, tanto rural como urbana, intrínseco a la distribución de la tierra inequitativa y al pésimo repartimiento de la riqueza nacional. El hambre en Colombia no se puede explicar únicamente como causa y consecuencia de la pobreza o como un hecho cultural, tal cual lo hace Horacio Gómez Aristízabal en su obra *El hambre en Colombia*, en la que inusitadamente culpa en algún momento del hambre campesina a la mala «escogencia» que hacen los campesinos de su dieta donde hay una prevalencia de carbohidratos en contra de legumbres y frutas, que muchas veces son las que el pequeño productor pone a la venta.

Lograr que Colombia erradique el hambre o que consiga rebajar el nivel de hambrientos a menos del 5 % de la población, como lo han hecho según la FAO países como Chile, Argentina o Venezuela, al menos en un pasado reciente, puede lograrse siempre y cuando se establezcan unas políticas pertinentes, claras y contundentes. No es azar que ningún plan de desarrollo de los gobiernos aquí estudiados tenga la lucha contra el hambre como un objetivo siquiera enunciado. En Colombia no se habla de hambre, se habla de desnutrición, por tanto sólo hay seres mal alimentados que son según las cifras, una minoría. No hay en las estadísticas de pobreza mención al hambre, por tanto se puede concluir con suficiencia que el hambre en Colombia es un problema invisible.

Sólo un consenso social permitirá erradicar el hambre en un territorio sobradamente rico en recursos naturales, y ese consenso pasa por el fin de la guerra interna, un fin que puede alcanzarse si, entre otras cosas, las causas históricas que originaron esta situación son divulgadas y no desconocidas o ignoradas como lo han hecho distintos sectores dirigentes. Por supuesto, erradicar el hambre exige una revaloración del campesinado, de su importancia en un país que aún se jacta de un potencial agrícola que malgasta. Exige, por tanto, la participación activa de este colectivo en la solución al problema de la tierra y, finalmente, una recuperación mediante políticas agrícolas y de desarrollo nacional de la soberanía alimentaria.

Bibliografía

CHERNICK, Marc. *Acuerdo Posible. Solución negociada al conflicto armado*. Bogotá: Ediciones Aurora, 2008.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL: *Panorama Social de América Latina 2002-2003*. 2003.

GAVIRIA, Alejandro. *Uribenomics y otras paradojas*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2008.

GÓMEZ, Horacio. *El Hambre en Colombia*. Bogotá: Universidad del Meta, Editora Guadalupe Ltda, 2005.

OCAMPO, José Antonio. *Memorias del Señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Marzo de 1993-Agosto de 1994*. Bogotá: Ministerio de Agricultura, 1994

PRADA, Eusebio. *La vida que vivimos. Historia Campesina*. Ediciones Aurora, Bogotá, 2008.

YEPES, Alberto. *Colombia. La agenda de la guerra posterga la agenda de compromisos del milenio*. Bogotá: Corporación Región, 2007.

Editores

Comisión Colombiana de juristas. *Violencia en Colombia*. Ediciones Legis. Bogotá, 2000.
Nueva Constitución Política de Colombia. Ediciones LEGIS. Bogotá, 1992.
ILSA. *Políticas Agrarias para Colombia*. Publicaciones ILSA. Bogotá, 2004.
IMPRENTA NACIONAL. *DIARIO OFICIAL*. Año CXXVI. N. 38855. Bogotá, 1989.
IMPRENTA NACIONAL. *Políticas generales de la lucha contra la pobreza y para la generación de empleo*. Documento CONPES. Bogotá, 1986.

Artículos de revista

Editorial «Un balance del cuatrienio 1982-1986». *ECONOMIA COLOMBIANA*. (1986), 4-8.

Artículos de periódico

MOLANO, Alfredo. «Convivir en la violencia». *UN Periódico*, Universidad Nacional de Colombia, Junio de 1997, 19.
LARA SALIVE, Patricia. «Inseguridad antidemocrática». *El Espectador*, 28 de agosto, 2009.

Recursos Electrónicos

Departamento Nacional de estadística DANE, «Copia de defunciones, 1979-1999» Documento en PDF, <http://www.dane.gov.co>. Consultada en julio de 2009.
Departamento Nacional de estadística DANE, «MESEP/ Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad»
http://www.dane.gov.co/files/noticias/Presentacion_pobreza_dane_DNP.pdf. Consultada en julio de 2009.
EL TIEMPO. COM, «Narcotráfico, extorsión, sicariato y robo de tierras tendrían afectados a 25 departamentos»
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/narcotrafico-extorsion-sicariato-y-robo-de-tierras-tendrian-afectados-a-25-departamentos_5875076-1. Consultada en agosto de 2009.
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, «Colombia-seguridad alimentaria»
<http://www.fao.org>, pdf. Consultada en febrero de 2009.
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, «FAO Hunger Map» <http://www.fao.org>. Consultada en febrero de 2009.
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, «FAO statistical year book 2003»
<http://www.fao.org>. Consultada en febrero de 2009.
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, «La situación alimentaria de los desplazados en Colombia»
<http://www.colombiasinpobreza.org/documentos.shtml>. Consultada en julio de 2009.
PNUD, «El conflicto, callejón con salida»
<http://indh.pnud.org.co/informe2003>. Consultada en julio de 2009.